

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarica

Temuco, trece de enero de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que para efectos de la acusación se tendrán presentes todos los antecedentes allegados a la investigación según consta a fs. 1 a fs. 1.093 **(Cierre de Sumario) (Tomos I a Tomo III)**, en particular auto de procesamiento de fs. 868 a fs. 903 **(Tomo III)**, que fuera confirmado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, a fs. 949 **(Tomo III)**, respecto de Benjamín Rodemil Farías Lavín y, en especial, los enunciados a continuación:

La dictación de esta acusación se estructura de la siguiente manera: **I.-** Introducción sobre los estándares normativos e interpretativos y el control de convencionalidad, en relación a la violación grave de los derechos humanos (delitos de lesa humanidad), pronunciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre la **obligación de investigar (considerandos 1-9)**; **II.-** Síntesis de estos estándares normativos e interpretativos **(considerando 10)**; **III.-** Aplicación del control de convencionalidad en esta materia **(considerandos 11 al 13)**; **IV.-** Síntesis de argumentación y razonamiento judicial **(considerandos 14 al 16)**; **V.-** Nociones sobre el delito de lesa humanidad **(considerandos 17 al 18)**; **VI.-** Nociones sobre el homicidio en cuanto a matar a otro **(considerandos 19 al 23)**; **VII.-** Elementos de prueba, descripción de los hechos, conductas, determinación del tipo penal y los responsables del hecho investigado, aplicación de medidas cautelares y otras medidas administrativas **(considerando 24)**.

1.- Los estándares normativos e interpretativos en materia de grave violación a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la **obligación de investigar**. Partamos expresando que un estándar, en esta materia sobre derechos humanos, corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la Obligación de investigar.

2.- Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados, y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

3.- Que esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (GARCÍA, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: NOGUEIRA, Humberto (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

4.- Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar en primer lugar la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

5.- Que del mismo modo, en segundo lugar debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo y/o interpretativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

6.- Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente: a) **Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988.** Párrafos 176 y 177, afirma en el 176 que (...) el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el 177 acota que (...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado; **b) Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999.** Párrafo 225, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos; **c) Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001.** Párrafo 41 asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; **d) Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001,** en su párrafo 42 anexa que (...)La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...); **e) Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003.** Párrafo 184 expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado; **f) Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115** explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos;

7) Que asimismo, g) sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expresa que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso; **h) Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004.** Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana; **i) Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005.** Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención; **j) Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005.** Párrafo 145 anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva; **k) Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005.** En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el 137 (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. **233 (...)** Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; **299 (...)** Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán; **l) Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006.** Párrafo 143 afirma que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarica

no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales;

8.- Que relacionado con lo anterior m) Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117** (...) Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129** (...) una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130** (...) Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido; **n) Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006.** Párrafos 111 y 114. Expresa **111** (...) Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana,

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114 (...)** Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía; ñ) **Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006.** Párrafo 387. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares; o) **Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007.** Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155 (...)** La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

investigación. **156** (...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo ; **p)**

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007.

Párrafo 106 indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; d) determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y e) en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio;

9.- Que en la misma perspectiva q) Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007.

Párrafo 131 manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos; **r) Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007.** Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. **112** (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas; **s) Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008.** Párrafo **142** narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además,

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos; **t) Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008.** Párrafo 77 acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes; **u) Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009.** Párrafo 283 añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de jus cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado; **v) Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009.** En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de jus cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado; **w) Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009.** Párrafo **135** apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación; **x) Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010.** Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación; **y) Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010.** Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales. **z) Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24**

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

febrero de 2011. Párrafo **194** asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

10.- Síntesis de estos estándares normativos e interpretativos citados.

Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar normativo e interpretativo en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer MacGregor- Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor que es además Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: **a)** Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida; **b)** si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho; **c)** el deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

judicial, así como a participar ampliamente de los mismos; **d)** cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida; **e)** la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención; **f)** Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia; **g)** La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales; **h)** El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”; **i)** esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos; **j)** El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo; **k)** La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación; **l)** en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación; **m)** la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables; **n)** la Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben **n.1)** Identificar a la víctima; **n.2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **n.3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **n.4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **n.5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

11.- Aplicación del control de convencionalidad. En esa idea de razonamiento, en todo caso- como expone Nogueira- debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por **debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente**. Considerando los

Nº 82 (Acusación) **Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarica**

artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además, los artículos 26,31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (NOGUEIRA, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: NOGUEIRA, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Santiago de Chile, Librotecnia) pp. 395-420.

12.- Que en consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los estándares normativos e interpretativos sobre derechos humanos para los **efectos de la Investigación** en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como se ha hecho en este proceso y en esta acusación), podemos reflexionar lo que sigue. La causa en estudio no puede analizarse desde un razonamiento y ponderación de prácticas e interpretaciones habituales de nuestras normas internas. En especial del Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Es decir, deben interpretarse las normas y realizar las investigaciones en conformidad a los estándares citados. Así, la Investigación debe ser acuciosa, removiendo todo obstáculo que permita llegar al esclarecimiento de los hechos. Además, se debe revisar todas las prácticas y usos militares de la época. Del mismo modo como operaba en la práctica la superioridad del mando entre otros aspectos. Es decir, debe ser una investigación seria, imparcial y efectiva. La debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención. En la misma línea para cumplir la **obligación de investigar** y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia; **d)** La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir **de una visión comprehensiva** de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarica

contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación. No es posible atendido el tiempo transcurrido desde los hechos, desechar prueba por asuntos formales- sin antes haber realizado un examen acucioso e integral con toda la prueba del proceso. Luego cualquier resolución del juicio tiene que ser construida, analizada y revisada bajo los estándares antes detallados. Si no se realiza de esa manera no estamos cumpliendo con los estándares explicitados y resultaría una ilusión el control de convencionalidad practicado.

13. Que de esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es **una expresión de la obligación de garantía** y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (NÚÑEZ, Constanza (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36).

14.- Que para ilustrar la sentencia tengamos presente algunas nociones de razonamiento y argumentación. La Teoría de la argumentación se centra en casos difíciles, relativa a la interpretación del derecho. Aunque muchas veces los problemas se refieren a los hechos. Manuel Atienza en su obra las razones del Derecho, nos explica que lo que debe entenderse por contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Así descubrir, es explicar el procedimiento en virtud del cual se llega a establecer una premisa o conclusión y otra cosa es el procedimiento que consiste en Justificar dicha premisa o conclusión. Así, decir que el juez tomó una determinada decisión, debido a sus firmes creencias religiosas, significa enunciar una razón explicativa; decir en cambio que la decisión el Juez se basó en el artículo 5° de la Constitución, significa enunciar una razón justificatoria. El mismo expone que lo que normalmente se entiende hoy por teoría de la argumentación jurídica tiene su origen en una serie de obras de los años 50 del siglo pasado.

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

Comparten entre si el rechazo de la lógica formal- Aristotélica- solemne, obligatoria, necesaria-, como instrumento para analizar los razonamientos. Ahora bien, la argumentación jurídica va más allá de la lógica, pues los argumentos jurídicos pueden estudiarse desde las perspectivas psicológicas, sociológicas o bien desde una perspectiva no formal; la denominada lógica material o informal- tónica, retórica, dialéctica. Aquí, la argumentación jurídica es entimemática, en ella no aparecen expresadas todas las premisas utilizadas, la conclusión puede cambiar cuando se añaden informaciones adicionales. El paso de una premisa a otra no es obligatorio, ni siquiera necesario, es más bien plausible. Entimemas, esto es, no realizamos silogismos completos, los damos por entendido y hacemos nuestras conclusiones. (M. L. ¿Qué hacemos con la sentencia? En Derecho y Lenguaje. Ensayos Línea, Discursos y Ejercicios. Universidad Mayor, 2018, pp. 45-83).

15.- Que en la ilación anterior, podemos considerar al menos – entre muchos- 2 autores relevantes sobre la materia. Stephen Toulmin con su Tribunal de la razón. Una nueva concepción de la lógica. Señala que la lógica formal o deductiva tal como se le entiende, no permite dar cuenta tampoco de la mayor parte de los argumentos que se efectúan en cualquier otro ámbito incluido el de la ciencia. Agrega que el único campo para el que sería adecuada la concepción de la argumentación que maneja la lógica es el de la matemática pura. No le interesa una lógica idealizada sino que una lógica operativa o aplicada y toma como ejemplo no la geometría sino que la jurisprudencia. Precisa que un buen argumento, un argumento bien fundado es aquel que resiste a la crítica y a favor del cual puede presentarse un caso que satisfaga los criterios requeridos para merecer un veredicto favorable. Afirma que las pretensiones extrajurídicas tienen que ser justificadas no ante sus majestades los jueces, sino que ante el Tribunal de la Razón. Luego, la corrección de un argumento no es una cuestión formal, esto es, dadas unas proposiciones de cierta forma puede inferirse otra de determinada forma. El asunto es de mayor relevancia, en el sentido de que algo tiene que juzgarse de acuerdo con criterios sustantivos e históricamente variables, apropiados para cada campo de que se trate. Explica que el uso argumentativo, supone que las emisiones lingüísticas fracasan o tienen éxito, según que puedan

Nº 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

apoyarse en razones, argumentos o pruebas. Por su lado otro autor como Robert Alexy, esgrime la argumentación Jurídica como discurso racional. La tesis central de este autor, consiste en considerar el discurso jurídico, a la argumentación jurídica como un caso especial del discurso práctico general, esto es, del discurso moral. Su teoría no pretende simplemente elaborar una teoría argumentativa de la teoría jurídica que permita distinguir los buenos de los malos argumentos, sino una teoría que sea también analítica, que penetre en la estructura de los argumentos y descriptiva, que incorpore elementos de tipo empírico. La teoría de Alexy va a significar una sistematización y una reinterpretación de la teoría del discurso de Habermas. Se puede indicar que para Habermas las innegables diferencias entre la lógica de la argumentación teórica y práctica no son tales como para desterrar a esta última del ámbito de la racionalidad, es decir, las cuestiones práctico morales pueden ser decididas mediante la razón, mediante la fuerza del mejor argumento; que el resultado del discurso práctico puede ser un resultado racionalmente motivado, la expresión de una voluntad racional, un consenso justificado, garantizado o fundado y que en consecuencia las cuestiones prácticas son susceptibles de verdad en un sentido lato de este término (la verdad como una correspondencia entre enunciado y hechos). Misma obra anterior.

16.- Que profundizando en lo anterior, cabe advertir que los jueces no han razonado jamás por un silogismo, ni menos por cadenas de silogismos y ninguna motivación es verdaderamente reductible a un silogismo o a una cadena de silogismo. El Magistrado en realidad utiliza múltiples herramientas en la construcción de su decisión judicial. Similar a como se construyen los relatos literarios. De manera más bien flexible y abierta. Así la argumentación jurídica- como se ha detallado- es entimemática, en ella no aparecen expresadas todas las premisas utilizadas, la conclusión puede cambiar cuando se añaden informaciones adicionales. El paso de una premisa a otra no es obligatorio, ni siquiera necesario, es más bien plausible. Entimemas, esto es, no se realizan silogismos completos, se dan por entendido y desde allí se realizan conclusiones (El tiempo y las circunstancias,

Nº 82 (Acusación) **Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarica**

factores relevantes para la investigación en el proceso penal, en casos de violaciones de derechos humanos. Proceso Constituyente Nueva Constitución. Acta XII Jornadas Constitucionales. Temuco, Universidad Mayor 2016 pp. 155-173).

17.- Que en cuanto a los delitos del **delito Lesa Humanidad**. Ya la Corte IDH en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile(antes citado) expresó que en sus párrafos 94 , 95, 98 y 99 que : **95**, el asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el cual fue anexado al Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de guerra del Eje Europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945 (el “Acuerdo de Londres”). Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946; **96**. La Corte, además, reconoce que el Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan **a un crimen como de lesa humanidad**. Este Estatuto proporcionó la primera articulación de los elementos de dicha ofensa, que se mantuvieron básicamente en su concepción inicial a la fecha de muerte del señor Almonacid Arellano, con la excepción de que los crímenes contra la humanidad pueden ser cometidos en tiempos de paz como en tiempos de guerra. En base a ello, la Corte reconoce que **los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos**, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarica

acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable". Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado; **98**, La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó "los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal". Asimismo, en 1947 la Asamblea General encargó a la Comisión de Derecho Internacional que "formul[ara] los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg". Estos principios fueron adoptados en 1950. Entre ellos, el Principio VI.c califica al asesinato como un crimen contra la humanidad. De igual forma, la Corte resalta que el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, de los cuales Chile es parte desde 1950, también prohíbe el "homicidio en todas sus formas" de personas que no participan directamente en las hostilidades; **99**, Basándose en los párrafos anteriores, la Corte encuentra que hay amplia evidencia para concluir que en 1973, año de la muerte del señor Almonacid Arellano, la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato ejecutado en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, era violatoria de una norma imperativa del derecho internacional. Dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es **una norma de ius cogens**, y la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general. Como puede observarse este pronunciamiento de la Corte IDH, nos ilustra sobre la materia y es plenamente **aplicable en esta acusación**.

18.- Que siguiendo la misma materia, el autor Humberto Quezada (Doctor en Derecho por la Universidad de Hamburgo y Universidad de Estrasburgo) en un estudio detallado (conocimiento público) sobre los tratados internacionales y

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

la preeminencia sobre normas internas, concluye en su extenso estudio que la **obligación de Juzgar y castigar como un principio general del derecho**. En consecuencia dicho autor al igual que la Corte IDH, nos muestran las nociones del delito de lesa humanidad, siendo aplicable en esta acusación.

19.- En cuanto a la noción de matar a otro. La palabra **homicidio** deriva de la expresión latina homicidium, que a la vez se compone de dos elementos: homo y caedere. Homo que significa hombre y caedere que significa matar. En esta forma, homicidio significa **muerte de un hombre causada por otro hombre**. Es decir privar de la vida a un ser humano por cualquier medio. En cuanto al **sujeto pasivo –reiteramos-** que sólo **puede ser sujeto pasivo** en el homicidio, una **persona física**, de manera que la muerte causada a un animal constituye el delito de daños en propiedad ajena, pero no homicidio; tampoco la persona jurídica o moral puede serlo.

20.- Que por otro lado, a partir, entre otros los artículos; 108, 110, 112, 116, 121, 124 , 125 del Código de Procedimiento Penal es posible determinar el hecho ilícito y los responsables en esta acusación, toda vez que de inicio (según estándares normativos e interpretativos sobre **obligación de investigar**) no es aceptable que por la **indeterminación del nombre de la víctima** no se permita determinar el hecho el ilícito y los responsables, pues de seguir esa teoría se contribuye a la impunidad. Borrar los antecedentes no es óbice para la investigación (Revista de derecho N° 10, diciembre de 2003 Doctrina procesal penal). En todo caso un ejemplo sencillo nos aclara la situación. Tres personas en un restaurant ver a un hombre que mata a otro hombre a través del disparo de un proyectil con un arma de fuego. La víctima no es posible identificarla pues es un extranjero que ingresó al país en forma irregular y estuvo siempre en forma clandestina sin documentos. Nadie puede decir que allí no hubo homicidio. Pues hay testigos que vieron de primera mano como un hombre mató a otro hombre.

21.- Que en esa misma ilación (**presunto NN**) a modo de simple referencia existen varios antecedentes judiciales públicos: **a)** 2 de Noviembre de 2015, en Antofagasta (Fiscal a cargo David Cortés) se detuvo a una persona como

Nº 82 (Acusación) **Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarica**

autor de un homicidio en una riña respecto de un hombre a esa fecha no identificado; **b)** el 10 de mayo de 2016 en Avellaneda, Argentina se condenó a una persona por homicidio respecto de un joven de rasgos orientales que, a tres años del crimen, **aún no pudo ser identificado** y su cadáver permanece en la morgue judicial (sentencia de causa nº 4370 (c/nº 47941/2013 del sistema lex-100) del Tribunal Oral en lo Criminal nº 8 de la Capital Federal; sentencia de casación de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional- sala 3 CCC 47941/2013/TO1/CNC1, Reg. Nº 671/2018 de la Capital Federal, del Poder Judicial de la Nación, República Argentina, de fs. 747 a fs. 867 **(Tomo III)**).

22.- Que resumiendo entonces la figura del homicidio (y por supuesto del homicidio calificado, artículos 390 y siguientes del Código Penal) este describe que (artículo 391): “ El que mate a otro...” Es decir como expone Garrido Montt al Derecho Penal, no le interesa la muerte en general, sino aquella provocada por el hombre, interrumpiendo la vida de otro (El homicidio y sus figuras penales, Santiago, ediciones Encina limitada 1976, pág 40). O bien como expone Carrara: “La muerte de un hombre causada por otro hombre” (misma obra citada, pág., 13). No **exige** el Código Penal- ni el tipo- que **se sepa los nombres y apellidos** de la víctima; sino que logremos determinar con claridad **que la víctima era otro hombre**. Luego es posible determinar en esta acusación el hecho ilícito y los responsables respecto de una persona no identificada (origen, nombre y apellidos) pero si vista (por varios soldados) tenuta en custodia (detenida) por agentes del Estado y caracterizada- como se indica más adelante. Lo **esencial** es que se mate a otro (a un ser humano).

23.- Que se reitera que se deben tener presente los elementos del estándar normativo e interpretativo, en este caso, en derechos humanos sobre la **obligación de investigar** respecto de graves violaciones a derechos humanos, en este caso delito de lesa humanidad. Este trabajo, es a criterio de este Tribunal, la correcta valoración del mérito del proceso y del derecho en este tipo de causas y que debe darse a este tipo de procesos y en esta acusación.

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

24.- Elementos de prueba, descripción de los hechos, conductas, determinación del tipo penal y los responsables del hecho investigado, aplicación de medidas cautelares y otras medidas administrativas.- Que del mérito del auto cabeza de proceso de fs. 1 (**Tomo I**), fotografía de fs. 225 (**Tomo I**); oficio N° 24887, de fecha 31 de octubre de 2017, de la Superintendencia de Pensiones, de fs. 490 (**Tomo II**); informe pericial de retrato descriptivo del Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 501 a fs. 503 (**Tomo II**); órdenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 9 a fs. 109 (**Tomo I**); de fs. 128 a fs. 153 (**Tomo I**); de fs. 312 a fs. 397 (**Tomo I y II**); de fs. 401 a fs. 425 (**Tomo II**); de fs. 439 a fs. 443 (**Tomo II**); de fs. 517 a fs. 520 (**Tomo II**); FORMULA REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO, tramitado en la República Argentina, por Martín López Perrando, Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 12, en causa Nro. 47.941 que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 43, Secretaría Nro. 109, respecto de Leandro Federico Schvap, fs. 714 a fs. 745 (**Tomo III**); copias simples de causa n° 4370 (c/n° 47941/2013 del sistema lex-100) del Tribunal Oral en lo Criminal n° 8 de la Capital Federal y sentencia de casación de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tramitado en la República Argentina, de fs. 747 a fs. 867 (**Tomo III**), extracto de filiación y antecedentes de fs. 917 a fs. 918 (**Tomo III**), de fs. 994 a fs. 995 (**Tomo III**), de fs. 1034 a fs. 1039 (**Tomo III**); informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile, de fs. 944 a fs. 946 (**Tomo III**); **declaraciones** de Manuel Segundo Mora Torres de fs. 3 a fs. 8 (**Tomo I**); de fs. 293 a fs. 294 (**Tomo I**); de fs. 506 (**Tomo II**), de fs. 1088 a fs. 1091 (**Tomo III**); de Arnoldo Aedo Matus de fs. 113 a fs. 117 (**Tomo I**); de Anacleto Aguirre Rivera, de fs. 118 a fs. 119 (**Tomo I**); de José Fernando Romero Silva, de fs. 124 a fs. 126 (**Tomo I**); de José Alejandro Oporto Seguel, de fs. 178 a fs. 179 (**Tomo I**); de Ricardo Segundo Tapia Melo, de fs. 180 (**Tomo I**); de Rufino

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarica

Quepumil Burgos, de fs. 181 a fs. 182 **(Tomo I)**; de Osvaldo Segundo Saravia Figueroa, de fs. 183 a fs. 185 **(Tomo I)**; de Armando Segundo Vallejos Barra, de fs. 186 a fs. 188 **(Tomo I)**; de Luciano César Vergara Rivera, de fs. 189 **(Tomo I)**; de Julio Painenao Ñanco, de fs. 190 **(Tomo I)**; de Omar Burgos Dejean, de fs. 227 a fs. 228 **(Tomo I)**; de Mamerto Germán Palma Contreras, de fs. 237 **(Tomo I)**; de Arturo Padilla Bascuñan, de fs. 238 **(Tomo I)**; de Benedicto Osses Córdova, de fs. 239 **(Tomo I)**; de Hugo Omar Ramos Pérez, de fs. 240 **(Tomo I)**; de Hugo Waldemar Álvarez Jaramillo, de fs. 241 **(Tomo I)**; de Jaime Patricio González Vásquez, de fs. 242 **(Tomo I)**; de José Héctor Marihueque Muñoz, de fs. 243 **(Tomo I)**; de Alfonso Arnoldo Contreras Parra, de fs. 244 **(Tomo I)**; de Vicente Lincoñir Navarro, de fs. 245 **(Tomo I)**; de Luis Alberto López Tenorio, de fs. 246 **(Tomo I)**; de Hernán Alfonso Parra Parada, de fs. 247 **(Tomo I)**; de José Fernando Vega Huenchumilla, de fs. 248 **(Tomo I)**; de Sigisfredo Alejandro Melo González, de fs. 249 **(Tomo I)**; de Heraldo Valentín Espinoza Elgueta, de fs. 264 a fs. 265 **(Tomo I)**; de Hernán Raúl Quiroz Barra, de fs. 287 a fs. 289 **(Tomo I)**; de Orlando Moreno Vásquez, de fs. 290 **(Tomo I)**; de Raúl Binaldo Schonherr Frías, de fs. 291 **(Tomo I)**, de fs. 509 a fs. 514 **(Tomo II)**; de Juan Carlos Concha Belmar, de fs. 292 **(Tomo II)**; de Juan Carlos Figueroa Claus, de fs. 296 a fs. 297 **(Tomo I)**; de Alfonso Podlech Michaud, de fs. 300 a fs. 301 **(Tomo I)**; de Daniel San Juan Clavería, de fs. 303 a fs. 304 **(Tomo I)**; de Ricardo Guillermo Gayoso Molina, de fs. 429 a fs. 431 **(Tomo II)**; de José Rosalino Segundo Cifuentes Quintana, de fs. 432 a fs. 433 **(Tomo II)**; de José Joel Matus Salazar, de fs. 455 a fs. 461 **(Tomo II)**; Eduardo Gastón Zúñiga Díaz, de fs. 462 a fs. 465 **(Tomo II)**, de fs. 469 **(Tomo II)**; de Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, de fs. 471 a fs. 473 **(Tomo II)**; de Daniel González Ortiz, de fs. 496 a fs. 498 **(Tomo II)**; de Mario Cruz Contreras, de fs. 525 a fs. 526 **(Tomo II)**; de Enrique Abzalón Castro Obreque, de fs. 528 a fs. 529 **(Tomo II)**; de Pedro Julio Espinoza Dinamarca, de fs. 530 a fs. 531 **(Tomo II)**; de Juan Bautista Labraña Luvecce, de fs. 532 **(Tomo II)**; de Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, de fs. 533 **(Tomo II)**, de Olga María Vásquez Muñoz de fs. 694 a fs. 695 **(Tomo II)**; careos de fs. 127 **(Tomo I)**; de

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

fs. 467 (**Tomo II**); de fs. 475 (**Tomo II**); de fs. 476 a fs. 477 (**Tomo II**); quedan suficientemente acreditados en autos los siguientes hechos:

A.- Que inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de la ciudad de Temuco, erigiéndose como Intendente el Coronel Comandante del Regimiento “La Concepción”, de Lautaro, Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez (**fallecido, según consta a fs. 593, Tomo II**) y como Gobernador de Temuco, el Coronel Pablo Iturriaga Marchesse (**fallecido, según consta a fs. 594, Tomo II**), Comandante del Regimiento de Infantería n.º 8 “Tucapel” de esta ciudad, quién además quedó como Jefe de la Guarnición de Temuco.

B.- Que la mencionada unidad militar se conformaba de distintas compañías, las que estaban compuestas por oficiales, clases y soldados conscriptos que formaban parte del Regimiento de Infantería N° 8 “Tucapel” de Temuco. Estas compañías, a su vez, formaban patrullas de efectivos militares que eran apostadas en distintos lugares de la ciudad para los efectos de control de toque de queda y custodia de lugares calificados como estratégicos por el mando militar.

C.- Que asimismo, estas compañías eran enviadas, en ocasiones, a distintos lugares de la región con el fin de realizar patrullajes y campañas militares. Es así que la compañía contraguerrillas, al mando del Teniente Velásquez, quién era comando y que llegó en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 a Temuco, y que, además, la conformaban los clases Heraldo Espinoza Elgueta, fs. 91-94 (**Tomo I**), fs. 264 a fs. 265 (**Tomo I**), Manuel Segundo Mora Torres (fs. 3 a fs. 8 (**Tomo I**), de fs. 293 a fs. 294 (**Tomo I**), de fs. 506 (**Tomo II**), Rafael Lizama Saldías y el cabo Benjamín Rodemil Farías Lavín (fs. 120 a fs. 122 (**Tomo I**), recién llegado de la Escuela de Formación, entre otros, y una dotación de entre 30 a 40 soldados conscriptos, seleccionados de diferentes compañías, fue enviada a instrucción militar a la ciudad de Villarrica en los primeros meses del año 1974.

D.- Que contemporáneamente, hubo en el Regimiento de Infantería N° 8 “Tucapel” de Temuco, un detenido que permaneció por

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

alrededor de dos meses en custodia del servicio de guardia del regimiento, en una dependencia anexa denominada “prevención”. Las características físicas de esta persona eran: contextura delgada, tez morena, 1.70 m., de estatura aproximadamente; además, de las conversaciones que testigos sostuvieron con ella, se observaba bastante conocimiento de la ideología de izquierda, muy instruido, y que, al parecer, ocupaba un alto cargo dentro de la militancia que ostentaba; su rostro era delgado, no de cara muy larga, no era ni gordo ni flaco, de una contextura deportiva; su edad estimada era entre los 25 y 35 años, según testimonios de Manuel Segundo Mora Torres, de fs. 3 a fs. 8 **(Tomo I)**, de fs. 293 a fs. 294 **(Tomo I)**, de fs. 506 **(Tomo II)**, Heraldito Valentín Espinoza Elgueta, de fs. 92 a fs. 94 **(Tomo I)** y de fs. 264 a fs. 265 **(Tomo I)**, de Eduardo Gastón Zúñiga Díaz, de fs. 462 a fs. 465 **(Tomo II)**, de fs. 469 **(Tomo II)**, de Ricardo Guillermo Gayoso Molina, de fs. 429 a fs. 431 **(Tomo II)**.

E.- Que siguiendo con lo anterior, lo pudieron ver varios soldados, entre los que se encuentran Manuel Segundo Mora Torres, según declaraciones de fs. 3 a fs. 8 **(Tomo I)**, de fs. 293 a fs. 294 **(Tomo I)**, de fs. 506 **(Tomo II)** y Heraldito Valentín Espinoza Elgueta, según declaración de fs. 92 a fs. 94 **(Tomo I)** y de fs. 264 a fs. 265 **(Tomo I)**, señalan que nunca recibió visitas, no teniendo claro si era de Temuco o de otra ciudad; se le apodó en el regimiento como el “telefonista” o el “nortino”. Igualmente fue visto por Ricardo Guillermo Gayoso Molina, según declaración de fs. 429 a fs. 431 **(Tomo II)** y por Eduardo Gastón Zúñiga Díaz, según declaraciones de fs. 462 a fs. 465 **(Tomo II)**, de fs. 469 **(Tomo II)**.

F.- Que mientras se encontraba la compañía contraguerrillas de instrucción en Villarrica, a orillas del Lago del mismo nombre, un día de los meses de enero o febrero del año 1974, llegó un camión militar con un detenido con su vista vendada, siendo reconocido por Manuel Segundo Mora Torres, según declaraciones de fs. 3 a fs. 8 **(Tomo I)**, de fs. 293 a fs. 294 **(Tomo I)**, de fs. 506 **(Tomo II)**, y por Heraldito Valentín Espinoza Elgueta, declaración de fs. 264 a fs. 265 **(Tomo I)**, como aquella persona que había

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

estado en la sala denominada “prevención” en el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco.

G.- Que el detenido fue entregado al teniente Velásquez por parte del chofer del camión, dándole a entender que aquél debía ser eliminado. Acto seguido, el teniente Velásquez procede a realizar un sorteo con papeles doblados, uno con la palabra SI y los demás con la palabra NO, tomando los clases y el oficial un papel, y quién tomara el papel con la palabra SI debía ser quien ejecutara al detenido, resultando elegido el clase Lizama Saldía para la ejecución, ante lo cual se negó, ofreciéndose para tal encargo el cabo recién llegado de la Escuela de Formación Benjamín Rodemil Farías Lavín quién señaló que sería el N° 24 en su lista de ejecuciones, según declaraciones de Manuel Segundo Mora Torres de fs. 3 a fs. 8 **(Tomo I)**, de fs. 293 a fs. 294 **(Tomo I)**, de fs. 506 **(Tomo II)** y Heraldó Valentín Espinoza Elgueta, de fs. 92 a fs. 94 **(Tomo I)** y de fs. 264 a fs. 265 **(Tomo I)**.

H.- Que luego, comenzando el atardecer, el teniente Velásquez ordenó a los soldados conscriptos retirarse de las orillas del Lago Villarrica unos cuantos metros hacia atrás para que no observaran la ejecución, pero igualmente todos se percataron de que ésta la iba a concretar el cabo recién llegado Benjamín Rodemil Farías Lavín, según declaraciones de Manuel Segundo Mora Torres de fs. 3 a fs. 8 **(Tomo I)**, de fs. 293 a fs. 294 **(Tomo I)**, de fs. 506 **(Tomo II)** y Heraldó Valentín Espinoza Elgueta, de fs. 92 a fs. 94 **(Tomo I)** y de fs. 264 a fs. 265 **(Tomo I)**.

I.- Que el detenido fue puesto sentado y con su vista vendada a las orillas del Lago Villarrica, mirando hacia el lago, mientras que el Teniente Velásquez, Espinoza, Lizama y Mora se posicionaron detrás del detenido a un metro de distancia. Posteriormente, el cabo recién llegado Benjamín Rodemil Farías Lavín sacó su pistola Stagger 9 mm y puso el cañón en la parte que une la cervical con el cuello, procediendo a disparar el arma, provocándole la muerte inmediatamente. Luego, se le amarró una cuerda al cuerpo con la finalidad de que hiciera peso y quedara en la profundidad del lago, por lo que el teniente Velásquez y el cabo Benjamín Rodemil Farías Lavín trasladaron el

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

cuerpo en un bote hasta una parte profunda del lago, donde lo lanzaron para que se hundiera. A su regreso, el cabo Benjamín Rodemil Farías Lavín comentó que el teniente Velásquez, con un corvo, abrió el vientre de la víctima, y, asimismo, le había cortado el pene y se lo colocó en la boca, y de esta forma lo arrojaron a las profundidades del lago Villarrica, según declaraciones de Manuel Segundo Mora Torres de fs. 3 a fs. 8 (**Tomo I**), de fs. 293 a fs. 294 (**Tomo I**), de fs. 506 (**Tomo II**) y Heraldo Valentín Espinoza Elgueta, de fs. 92 a fs. 94 (**Tomo I**) y de fs. 264 a fs. 265 (**Tomo I**).

II.- Que los hechos antes reseñados, constituyen el delito de **Homicidio Calificado** de la víctima **NN**, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, circunstancias 1ª y 5ª, en su carácter de lesa humanidad.

III.- Que de estos mismos antecedentes y propias declaraciones de Benjamín Rodemil Farías Lavín de fs. 120 a fs. 122 (**Tomo I**); de fs. 1088 a fs. 1091 (**Tomo III**); careos de fs. 127 (**Tomo I**); de fs. 476 a fs. 477 (**Tomo II**), se desprenden fundadas presunciones para estimarlo autor del delito referido en la consideración anterior.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 424 y 425 del Código de Procedimiento Penal, **SE DECLARA** que se eleva esta causa a **PLENARIO** y se **ACUSA** a:

1) BENJAMÍN RODEMIL FARÍAS LAVÍN como autor del delito de **homicidio calificado** en la persona de la víctima **NN**, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, circunstancias 1ª y 5ª, en su carácter de lesa humanidad, perpetrado en la comuna de Villarrica, en los meses de enero y/o febrero de 1974.

Practíquese las notificaciones legales correspondientes.

Confiérase traslado de la presente acusación a los abogados querellantes. Notifíqueseles por cédula a través del receptor de turno.

Atendido que se trata de delitos que atentan contra los Derechos Humanos ocurrido luego del 11 de septiembre de 1973, remítase esta

N° 82 (Acusación) Homicidio calificado: NN ejecutado a orillas del lago Villarrica

resolución, en su oportunidad, al Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol: 39.296.-

DICTADO POR DON ÁLVARO CLAUDIO MESA LATORRE, MINISTRO EN VISITA EXTRAORDINARIA PARA LAS JURISDICCIONES DE TEMUCO, VALDIVIA, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE.

Autoriza doña **JOCELYN ALEJANDRA FUENTES CORTÉS**, Secretaria Ad Hoc.

En Temuco, a trece de enero de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede. GM.